

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTE	: NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA
DEMANDADO :	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00480-01
RADICADO INTERNO	: 363-23
DECISIÓN	: REVOCA, ORDENA, CONDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 038

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los **recursos de apelación** en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita se DECLARE deje sin efectos la afiliación al Régimen de Ahorro Individual realizada con el fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A, dado que el traslado fue originado por omisión en la información; se declare que el actor permaneció afiliado sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media.

Se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 DE 1993, con base en un monto del 90% del IBL; al pago de los intereses moratorios o en subsidio la indexación; y al pago de las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 28 de junio de 1953; mediante resolución 347.032 del 9 de diciembre de 2013 le fue reconocida la pensión de vejez de la Ley 797 de 2003, a partir del 1º de diciembre de 2013 en cuantía de \$1.488.762, la cual se liquidó teniendo en cuenta 1.510 semanas cotizadas y una tasa de reemplazo del 71.23%; el demandante estuvo afiliado a PROTECCIÓN S.A en el año 1997, permaneció hasta el año 2010, fecha en que retornó al ISS hoy Colpensiones.

Sostuvo que no contó con asesoría con asesor de PROTECCIÓN S.A, por lo que no le informaron las condiciones que conllevaba el traslado, no le explicaron que con el traslado perdía el régimen de transición, por lo que la accionada PROTECCIÓN S.A, indujo en error al actor por tanto, estuvo viciando el consentimiento; que en toda su vida laboral, ha cotizado un total de 1515 semanas, entre el 28 de octubre de 1980 y el 30 de septiembre de 2013, de las cuales 750 semanas fueron cotizadas con anterioridad al 25 de julio de 2005, y para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; el 5 de octubre de 2020 le solicitó a PROTECCIÓN S.A y a Colpensiones dejar sin efectos su afiliación por omisión en la información y le solicitó a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez.

### **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA**

**Colpensiones al dar respuesta** a la demanda indicó aceptó la fecha de nacimiento; el reconocimiento de la pensión de vejez al actor teniendo en cuenta un IBL de \$2.090.077, una tasa de reemplazo del 71.23% y una mesada pensional de \$1.488.762 a partir del 1º de diciembre de 2013; aceptó el traslado del actor a PROTECCIÓN S.A y el retorno al Régimen de Prima Media; que tiene 1.515 semanas cotizadas; la reclamación elevada a Colpensiones. No le consta los hechos restantes. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de aceptar la vinculación al Régimen de Prima Media con prestación definida administrado por Colpensiones; desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones - art. 48 de la constitución política; sobre la procedencia de intereses moratorios e indexación de las condenas; prescripción, compensación; buena fe; imposibilidad de condena en costas (expediente digital 07).

**Y PROTECCIÓN S.A en su contestación** manifestó que es cierta la fecha de nacimiento del actor; el traslado realizado a PROTECCIÓN S.A el 24 de

febrero de 1997; la solicitud elevada a PROTECCIÓN S.A. No es cierta la falta de información por parte de la sociedad PROTECCIÓN S.A. Y que no le constan los hechos restantes. Se opuso a las pretensiones de la demanda porque la afiliación se realizó en forma libre y espontánea, solemnizándose de esta forma su afiliación. Propuso las excepciones de cosa juzgada constitucional, inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, innominada, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, traslado de aportes a otra administradora de fondos de pensiones (expediente digital 09).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 14 de noviembre de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta PROTECCIÓN S.A, en contra de la presente demanda ordinaria laboral.

ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN S.A y Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante Sr. Norman Jairo Ortiz Acosta. Condenó en costas a la parte demandante en favor de las demandadas.

La decisión se sustenta porque para el Juzgado no hubo falta de información, dado que el actor en forma libre se trasladó de régimen en 1997 para obtener beneficios del Régimen de Ahorro Individual, retornó al Régimen de Prima Media en el año 2010 al considerar que iba a tener una pensión más beneficiosa, y solicitó la pensión de vejez a Colpensiones la cual obtuvo en el año 2013, además aseguró la A Quo, que el demandante contaba con una información cabal y suficiente del funcionamiento del régimen de pensiones y de la conveniencia de uno y otro en su momento.

Adicionalmente, sustentó su decisión en sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 14 de mayo de 2019 proceso radicado 05-001-31-05-007-2015-01295. Por su parte, de la sentencia SL 17.595 de 2017 reseñó *“Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación*

*para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago.”, y de la sentencia C 841 de 2003.*

## **IMPUGNACIÓN**

**La apoderada de la parte demandante** apelación la decisión, por considerar que el actor tiene derecho al reconocimiento de las pretensiones de la demanda por estar pensionado por Colpensiones, al contar con 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y haber retornado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, por lo que debe conservar el derecho para que su pensión le sea reconocida con el régimen de transición aplicando una tasa de remplazo del 90%, y donde la reliquidación sea reconocida desde la causación del derecho, además de ser reconocidos los intereses por mora.

Considera que no se puede negar las pretensiones de la demanda por no haberse cotizado 15 años al 1º de abril de 1994, al existir jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que exige únicamente que se tenga la edad al momento de la vigencia del sistema; además no se afecta financieramente el sistema al haberse trasladado a Colpensiones los aportes y rendimientos.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** solicita que la sentencia sea revocada y se declare la ineficacia del traslado Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual y se ordene la reliquidación pensional con una tasa del 90%, porque de conformidad con lo señalado el art. 11 del Decreto 692 de 1994 y la sentencia 79.021 de 2022 era deber del fondo de pensiones dar explicaciones suficientes y veraces al actor al momento de la afiliación y en este evento PROTECCIÓN S.A. no cumplió la carga probatoria de demostrar el consentimiento informado, en consecuencia se debe declarar la ineficacia del traslado de conformidad con el art. 271 de la Ley 100 de 1993 y el restablecimiento de generar que las cosas regresen al estado inicial , por lo tanto, la pensión del actor debe ser reliquidada con el régimen de transición, no obstante haber obtenido el estatus de pensionado por medio de la resolución 347.032 de 2013 emitida por Colpensiones.

**El apoderado de Colpensiones** invoca la sentencia proferida pro el Tribunal Superior de Pereira, donde se revocó la sentencia de primera instancia y se absolvió a las demandadas aduciendo “En conclusión en los procesos tendientes a dejar sin efectos una afiliación hecha a cualquiera de los dos regímenes, con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez de forma libre y espontánea, deberá acreditar imperiosamente que la AFP a la que se afilio incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, esto es, brindarle la información adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio de libertad informada y en esa medida poder dar rienda suelta al art. 1604 del C.C., pues la presunción allí establecida no es el cumplimiento de la obligación sino la culpa en tal incumplimiento, iterase, una vez probado este.”, ya que la asesoría se restringe a la información de las diferencias de los regímenes pensionales sin que ello se pueda analizar desde el punto de vista del buen o mal consejo porque ello usurpa la voluntad del afiliado. En consecuencia, con lo anterior, el demandante suscribió el formulario de vinculación y reiteró su voluntad de permanencia al Régimen de Ahorro Individual siendo solo en el año el 2022 que pretende devolverse al Régimen de Prima Media.

Así mismo, sustenta sus alegatos en la sentencia C 789 de 2002 y SL 373 de 2020. Considera que el actor no puede ser beneficiario del régimen de transición ni una pensión de vejez al momento de cumplir requisitos, dado que existió un traslado al Régimen de Ahorro Individual con varias AFP, donde le realizaron varias reasesorías con el fin de escoger el régimen que más le convenía.

En caso de ser condenada Colpensiones a activar la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media, solicito que los fondos privados trasladen todos los aportes, incluidos los rendimientos y los gastos y cuotas de administración debidamente indexados, egresos que han fortalecido el patrimonio del fondo privado a expensas de la mala asesoría que realizo al demandante, de acuerdo a las últimas sentencias de la corte suprema de justicia.

### **CONSIDERACIONES**

El problema jurídico se centra determinar en virtud del recurso de apelación, si procede la ineficacia del traslado al RAIS y como consecuencia de ello, el actor tiene derecho a recuperar el régimen de transición, a reajustar de la

pensión de vejez en aplicación del aplicando una tasa de remplazo del 90% y al pago de los intereses moratorios.

Considera la Sala al ser direccionado el recurso de apelación al derecho que le asiste al actor de conservar el régimen de transición y la reliquidación de la pensión de vejez con el 90%, ello genera que se trate de una pretensión subsidiaria al reconocimiento de la ineficacia del traslado, lo que da lugar a analizar si el actor tiene derecho a la ineficacia del traslado y si tiene derecho como consecuencia, a la reliquidación de la pensión de vejez aplicando el régimen de transición.

En ese sentido, no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante es beneficiario del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 40 años de edad al haber nacido el 28 de junio de 1953 (fl. 17 del expediente digital 01); cotizó al ISS del 28 de octubre de 1980 a febrero de 1997 según reposa en la historia laboral de fls. 24 a 32 del expediente digital; solicitó traslado a PROTECCIÓN S.A el 24 de febrero de 1997 y le brindaron reasesoría el 12 de diciembre de 2003, oportunidad en que determinó que se quedaría en el Régimen de Ahorro Individual (fl. 26 a 34 expediente digital 09).

A fl 39 del expediente digital 09, reposa oficio emitido por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, del 23 de septiembre de 2010 en el proceso con radicado 2010-00418, por medio del cual se notificó a PROTECCIÓN S.A la decisión de la sentencia de tutela proferida, de la que se extrae lo siguiente: *“FALLA: PRIMERO. Se accede a la solicitud de tutela elevada por el señor NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA ... por la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social a la libre escogencia y petición. SEGUNDO. Se le ordena a PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a autorizar el traslado del señor NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA al régimen de prima media administrado por el Seguro Social. TERCERO. Se ordena a PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A que inicie los trámites pertinentes para trasladar la totalidad del ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad por el señor NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA al Seguro Social lo cual deberá cumplirse efectivamente en un término máximo de 15 días. CUARTO. Se ordena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES aceptar e incluir dentro de la base de datos de sus*

*afiliados y en calidad de tal, al señor NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA de conformidad con la parte motiva de la presente sentencia. (...)*”

Según el historial de vinculaciones aportado por PROTECCIÓN S.A, el actor solicitó el traslado a Colpensiones el 4 de junio de 2010, el cual se hizo efectivo a partir del 1º de agosto de 2010 (fl. 40). En resolución GNR 347.032 de 2013, Colpensiones le reconoció pensión de vejez al actor a partir del 1º de diciembre de 2013 aplicando la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta 1.510 semanas cotizadas, un IBL de \$2.090.077, una tasa de reemplazo del 71.23%, que generó una mesada pensional de \$1.488.762 (fls. 37 a 41 del expediente digital 01)

Y no se evidencia confesión al no haberse decretado el INTERROGATORIO DE PARTE del accionante.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

### **1. De la ineficacia del traslado**

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará*

*acreedor, en cada caso y por cada afiliado...” no solo a la multa sino que dice en forma expresa “... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”, o sea que se refiere a una ineficacia.*

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES.** Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...”.** (Resalto fuera del texto)

**“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES.** Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

*“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; ...”*

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice que la información tiene que ver con: 1º. **La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional**, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica.



Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217, 782 de 2021 y SL 1465 de 2021, SL 755, SL 779 y SL 4297 de 2022 y SL 1084 de 2023, y como juez constitucional en las sentencia STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, **cuando tomó la decisión de trasladarse a dicho fondo de pensiones**, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica

que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles (sentencia SL 3202 de 2021 que remite a las sentencias SL 1688 de 2019, SL 12715 de 2014, 28.479 de 2008, 39.347 de 2012 y 8397 de 1996) **y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto**, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCIÓN S.A. aporte el formulario de afiliación del 24 de febrero de 1997; historia laboral del proceso de reclamación de su bono pensional; certificado laboral; formulario de autoliquidación de aportes; formulario de reasesoría del 12 de diciembre de 2003; simulación pensional; respuesta a derecho de petición; oficio del Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín; historial de vinculaciones; certificado de constancia de traslado; reporte de estado de cuenta; información de ASOFONDOS; comunicados de prensa; publicaciones; concepto 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015; documento denominado “Políticas Asesorar para vincular personas naturales”, lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al Régimen de Ahorro Individual, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Sin embargo, se hace necesario advertir, que este caso es especial y diferente a los que contempla las providencias de la Corte Suprema de Justicia, dado que, si bien el demandante se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, también es cierto que en cumplimiento de sentencia de tutela **retornó al Régimen de Prima Media y en el año 2013 le fue reconocida pensión de vejez**, tal y como se desprende de la Resolución GNR 347.032 de 2013. En este sentido, para esta Corporación no le asiste razón a la A Quo cuando sustenta la decisión absolutoria la sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 14 de mayo de 2019 proceso radicado 05-001-31-05-007-2015-01295, por tratarse presupuestos facticos diferentes a los acontecidos en el presente evento, en vista que la sentencia hace referencia a pensionados del Régimen de Ahorro Individual, mientras que en este evento, el Sr. Norman Jairo Quintero Acosta después de estar afiliado a PROTECCIÓN S.A se trasladó a Colpensiones y allí **fue pensionado por vejez** y en ese sentido, la declaratoria de ineficacia del traslado en este evento se dirige a declarar que la afiliación a PROTECCIÓN S.A nunca existió y **no se dirige a revertir la calidad de pensionado y ser trasladado de régimen pensional**; por lo tanto, no se generarían las afectaciones analizadas en la sentencia Tribunal Superior de Medellín del 14 de mayo de 2019 proceso radicado 05-001-31-05-007-2015-01295 ni en la sentencia C 841 de 2003, relacionadas a los percances financieros que se presentan, pues se reitera, el demandante en agosto de 2010 retornó al Régimen de Prima Media y en

diciembre de 2010 le fue reconocida la pensionado en el Régimen de Prima Media.

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser REVOCADA para en su lugar DECLARAR la ineficacia del traslado realizado por el demandante a PROTECCIÓN S.A el 24 de febrero de 1997.

## 2. De los efectos de la ineficacia

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes<sup>1</sup>:

**1º. Capital ahorrado:** Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de 2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

**2º. Rendimientos:** En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

**3º. Los gastos de administración,** encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”*, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

**En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados,** hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL

---

<sup>1</sup> Sentencia SL 3051 del 7 de julio de 2021, engloba la obligación de trasladar todos los conceptos, al señalar: “Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adocinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”

1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al Régimen de Ahorro Individual, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden de que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

***En tal sentido, se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.”** (Resalto fuera del texto)*

**Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes**, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Así mismo debe precisarse que los anteriores conceptos deben ser trasladados **con cargo a los propios recursos** de la AFP del RAIS sin necesidad de vincular a las aseguradoras, según lo ha consagrado en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019 y CSJ SL2877-2020, precisándose en dichas providencias que estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Conceptos que **no prescriben** teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021, SL 1688 de 2019, SL 1465 de 2021, SL1949-2021, y SL 4063 de 2021).

**4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo **7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016**; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Para concluir, en sentencia reciente SL 3051 del 7 de julio de 2021, se engloba la obligación que tienen las entidades del Régimen de Ahorro Individual de trasladar los conceptos referidos anteriormente, al señalar: *“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”*

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el **principio de sostenibilidad financiera** no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

*“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”*

Teniendo claro lo anterior, y como en el presente evento el Sr. Norman Jairo Ortiz Acosta en cumplimiento de la sentencia de tutela había retornado al Régimen de Prima Media y se trasladó el ahorro realizado en el Régimen de Ahorro Individual, conforme reposa en los fls 39 y 42 del expediente digital 09, considera la Sala que se deberá ORDENAR a la sociedad PROTECCIÓN S.A trasladar a Colpensiones:

- Los rendimientos que se hubieren causado, de las cotizaciones efectuadas por el actor en el periodo en que estuvo afiliado a PROTECCIÓN S.A.

- Trasladar a Colpensiones, los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*” y el porcentaje de garantía de pensión mínima debidamente indexados y con cargo a su propio patrimonio, por el tiempo en que el demandante realizó aportes a cada uno de dichos fondos de pensiones.

Advirtiéndose que, los descuentos por conceptos de Fogafín se deberán retornar, por el tiempo en que se hayan efectivamente realizado.

Como consecuencia se deberá ordenar a Colpensiones a recibir los dineros trasladados y que realice la activación al Régimen de Prima Media a través de Colpensiones, reflejándose en la historia laboral los aportes recibidos de la parte demandante sin solución de continuidad.

De conformidad con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia SL 896 del 23 de marzo de 2022, se le ORDENARÁ PROTECCIÓN S.A que, al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por la parte demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, **los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.**

### **3. De la pensión de vejez**

No existe discusión y se encuentra probado que la demandante nació el 28 de junio de 1953 (fl. 17 expediente digital 01); el 5 de diciembre de 2014 solicitó corrección de la historia laboral (expediente administrativo); solicitó la pensión de vejez a Colpensiones el 5 de julio de 2013 y por medio de Resolución GNR 347.032 de 2013 se reconoció la prestación económica en aplicación de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta 1.510 semanas, un IBL de \$2.090.077, una tasa de reemplazo del 71.23% y reconoció una mesada pensional de \$1.488.762 a partir del 1º de diciembre de 2013 (fls. 37 a 41); el 10 de abril de

2019 solicitó el reconocimiento de la pensión bajo el régimen de transición (fl. 24).

Visto lo anterior, y como en el presente evento se declaró la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Medía al Régimen de Ahorro Individual, y se declaró que el actor continuó afiliado al ISS hpy Colpensiones sin solución de continuidad, ello genera que se analice si el demandante es beneficiario del régimen de transición, y en ese sentido se encuentra probado que al haber nacido el 28 de junio de 1953, implica que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 40 años, por lo que era beneficiario del régimen de transición consagrado en el art. 12 del Decreto 758 de 1990, el cual exige, en el caso de los hombres, acreditar 60 años de edad y 1000 semanas en toda su vida laboral o 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima pensional.

En consideración al primer requisito, encontramos que los **60 años de edad los cumplió el demandante el 28 de junio de 2013** y el requisito de las semanas, encontramos en su historia laboral actualizada al 4 de octubre de 2022 que reposa en la contestación de la demanda de Colpensiones fl. 105 del expediente digital 07, que en toda su vida laboral cotizó un **total de 1.515,14 semanas**, de las cuales: 1.000 semanas fueron cotizadas para el mes de **septiembre de 2000** y las 750 semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005 que permite extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, las alcanzó a cotizar para el **30 de julio de 1995**.

Teniendo claro lo anterior se concluye, que como la aplicación del régimen de transición finalizaba el 31 de julio de 2010, pero el demandante acreditó las 750 semanas con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ello generó que el régimen de transición se extendiera hasta el 31 de diciembre 2014, y en ese sentido, las 1.000 semanas las acreditó en septiembre de 2000 y los 60 años de edad los alcanzó el 28 de junio de 2013, razón por lo que se DECLARARÁ que el demandante es beneficiario del régimen de transición.

Bajo esos presupuestos, hay lugar a reliquia la pensión de vejez que le fuera reconocida al actor, en el sentido que al contar con 1.515,14 semanas cotizadas, el art. 20 del Decreto 758 de 1990 determina que la tasa de remplazo lo es del 90%, que al ser aplicaba al IBL de \$2.090.077, que fue hallado por Colpensiones en la Resolución GNR 347.032 de 2013, genera una mesada pensional de **\$1.881.069** para el año 2013, lo que da lugar al reajuste



de la mesada pensional en vista que Colpensiones reconoció una mesada de \$1.488.762 para dicha anualidad.

Con fundamento en lo expresado, se REVOCARÁ la sentencia absolutoria, para en su lugar CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$31.829.479** por concepto de retroactivo del reajuste pensional causado desde el **5 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2023**, liquidación que se realiza por 13 mesadas pensionales por ser adquirido el derecho pensional con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, conforme la tabla que se anexan a continuación:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2013	1,94%	\$ 1.488.762	\$ 1.881.069	\$ 392.307		\$ -
2014	3,66%	\$ 1.517.644	\$ 1.917.562	\$ 399.918		\$ -
2015	6,77%	\$ 1.573.190	\$ 1.987.744	\$ 414.555		\$ -
2016	5,75%	\$ 1.679.695	\$ 2.122.315	\$ 442.620		\$ -
2017	4,09%	\$ 1.776.277	\$ 2.244.348	\$ 468.071		\$ -
2018	3,18%	\$ 1.848.927	\$ 2.336.142	\$ 487.215		\$ -
2019	3,80%	\$ 1.907.723	\$ 2.410.431	\$ 502.708	3,87	\$ 1.945.481
2020	1,61%	\$ 1.980.216	\$ 2.502.027	\$ 521.811	13	\$ 6.783.546
2021	5,62%	\$ 2.012.098	\$ 2.542.310	\$ 530.212	13	\$ 6.892.761
2022	13,12%	\$ 2.125.178	\$ 2.685.188	\$ 560.010	13	\$ 7.280.134
2023	9,28%	\$ 2.404.001	\$ 3.037.485	\$ 633.484	13	\$ 8.235.287
2024		\$ 2.627.092	\$ 3.319.363	\$ 692.271	1	\$ 692.271
					TOTAL	\$ 31.829.479

El reconocimiento del retroactivo del reajuste pensional se reconoce a partir del 5 de octubre de 2022, por haber operado el fenómeno de la prescripción del reajuste pensional de las mesadas anteriores al **5 de octubre de 2019**, toda vez que en aplicación de lo reseñado en el art 489 del CST, que establece: “INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, **interrumpe la prescripción por una sola vez**, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.” (Negrilla de la Sala). Y en ese sentido se extrae del expediente digital, que la pensión de vejez fue reconocida a partir del 1º de diciembre de 2013 (fl. 37 del expediente digital 01); la reclamación fue elevada el **5 de octubre de 2022** (fl. 19); y la demanda se presentó el 28 de octubre de 2022 (fl. 01).

A partir del mes de febrero de 2023, Colpensiones deberá continuar reconociendo al actor, una mesada pensional de \$3.319.363, más los aumentos legales a los que haya lugar.

Se AUTORIZA a Colpensiones a realizar el descuento correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud, sobre el retroactivo del reajuste de la pensión de vejez, en aplicación del art. 204 de la Ley 100 de 1993 y trasladarlo a la EPS que se encuentre afiliado el demandante.

#### 4. De los intereses moratorios

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 al regular la aplicación de los intereses moratorios, indica:

*“INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, **en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales** de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”* (Negrillas fuera del texto).

Partiendo de lo anterior debe advertirse que esta Sala era de la posición que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no eran procedentes cuando de reliquidaciones o reajustes sino solo cuando se presentaba mora en el pago total de las mesadas pensionales, sin embargo dicha posición ha sido replanteada en aplicación de la sentencia SL 3130 de 2020 y acogiendo los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia SU 063 de 2023 donde se deja claro que dichos intereses son procedentes para reajustes o reliquidaciones pensionales.

No obstante, lo anterior no se accederá a su reconocimiento, bajo el entendido que el reajuste pensional solo podía efectuarse una vez la justicia ordinaria se pronunciara frente a la ineficacia del traslado de régimen pensional y la conservación o no del régimen de transición pensional. En ese orden de ideas, como es solo a partir de esta providencia que se declara la ineficacia del traslado y la conservación del régimen de transición por parte del actor, considera la Sala que no hay lugar a imponer a Colpensiones la carga de pagar los intereses moratorios.

Pero a lo que si se accederá, es a CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar la indexación del reajuste pensional, el cual deberá ser liquidado tomando como índice inicial el 5 de octubre de 2022 y como índice final, la fecha del pago efectivo de la obligación, toda vez que la parte accionante no tiene por qué soportar la responsabilidad de asumir la pérdida del valor adquisitivo, y el capital adeudado ha sido afectado por pérdida del valor

adquisitivo de la moneda, más aún cuando el artículo 180 del CGP indica que los indicadores económicos nacionales son hechos notorios, y la sentencia SL 815 de 2021 determinó “Además, resulta pertinente recordar que según la posición actual de la Sala, el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa, pues tal corrección monetaria pretende impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario, en procura de que la obligación se satisfaga de manera completa e integral (SL359-2021).”

## **5. De las costas a cargo de Colpensiones**

Se REVOCARÁ las costas impuestas en primera instancia, para en su lugar imponer costas en primera y segunda instancia a PROTECCIÓN S.A. en aplicación del numeral 4º del art. 365 del CGP que reza: “4. *Cuando la sentencia de segunda instancia **revoque totalmente la del inferior**, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.*”.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.130.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A.

## **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

## **RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar **DECLARAR** la ineficacia del traslado realizado por el Sr. Norman Jairo Ortiz Acosta al Régimen de Ahorro Individual, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENARLE** a la sociedad PROTECCIÓN S.A trasladar a Colpensiones:

- Los rendimientos que se hubieren causado, de las cotizaciones efectuadas por el actor en el periodo en que estuvo afiliado a PROTECCIÓN S.A.

- Trasladar a Colpensiones, los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*” y el porcentaje de garantía de pensión mínima debidamente indexados y con cargo a su propio patrimonio, por el tiempo en que el demandante realizó aportes a cada uno de dichos fondos de pensiones.

Advirtiéndose que, los descuentos por conceptos de Fogafín se deberán retornar, por el tiempo en que se hayan efectivamente realizado.

**TERCERO: ORDENARLE** a Colpensiones a recibir los dineros trasladados y que realice la activación al Régimen de Prima Media a través de Colpensiones, reflejándose en la historia laboral los aportes recibidos de la parte demandante sin solución de continuidad.

**CUARTO: ORDENARLE** a PROTECCIÓN S.A. que, al momento de cumplirse la orden del traslado de la totalidad de los dineros que a título de aportes fueron pagados por la parte demandante y sus empleadores, junto con los rendimientos financieros que se hubiesen producido, y demás integrantes de su cuenta de ahorro individual, con las cuotas de administración, comisiones, aportes al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, primas para seguros previsionales o cualquier otra causa, debidamente indexados, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

**QUINTO: CONDENAR** a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$31.829.479** por concepto de retroactivo del reajuste pensional causado desde el **5 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2023**, conforme la tabla que reposa en la parte motiva de la providencia.

A partir del mes de febrero de 2023, Colpensiones deberá continuar reconociendo al actor, una mesada pensional de \$3.319.363, más los aumentos legales a los que haya lugar.

**SEXTO: AUTORIZAR** a Colpensiones a realizar el descuento correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud, sobre el retroactivo del reajuste de

la pensión de vejez, en aplicación del art. 204 de la Ley 100 de 1993 y trasladarlo a la EPS que se encuentre afiliado el demandante.

**QUINTO: CONDENAR** a Colpensiones a reconocer al actor la indexación del reajuste pensional, el cual deberá ser liquidado tomando como índice inicial el 5 de octubre de 2022 y como índice final, la fecha del pago efectivo de la obligación.

**SEXTO: REVOCAR** las costas impuestas en primera instancia, para en su lugar imponer costas en primera y segunda instancia a PROTECCIÓN S.A.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.130.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A.

**SÉPTIMO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: NORMAN JAIRO ORTIZ ACOSTA
DEMANDADO :	: FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00480-01
RADICADO INTERNO	: 363-23
DECISIÓN	: REVOCA, ORDENA, CONDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente

**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/162> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 13 de marzo de 2024 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 13 de marzo de 2024 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**